JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.

Acción de tutela No. 11001 4003 053 2022 01025 01

Resuelve el Juzgado la impugnación a que fue sometida la sentencia del 18 de noviembre de 2022, proferida por el Juzgado 53° Civil Municipal de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por el señor JAIME GULLOSO GARCÍA quien actúa en nombre y representación de su hijo menor de edad ANGEL DAVID GULLOSO MERCADO, contra SANITAS EPS y DROGUERIA CRUZ VERDE, trámite al cual se vinculó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES, Fundación Neumológica Colombiana y la Superintendencia Nacional de Salud.

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretende el accionante el amparo de los derechos fundamentales a la salud, seguridad social, dignidad humana, vida e igualdad que le asisten a su hijo menor de edad ANGEL DAVID GULLOSO MERCADO. En consecuencia, solicitó: *“Ordenar a EPS SANITAS que autorice y entregue todos y cada uno de los medicamentos bien sea a TRAVÉS DE LA DROGUERÍA CRUZ VERDE O A TRAVÉS DE CUALQUIER OTRO PROVEEDOR DE MEDICAMENTOS: MONTELUKAST 4m granulado en sobres (últimamente reformulado por la presentación en tabletas), DESLORATADINA en jarabe (últimamente reemplazando a la LORATADINA en jarabe), BECLOMETASONA 50mg/dosis solución o suspensión, SALBUTAMOL de 50 mg/inhalador bucal y FLUTICASINA de 27.5 gr fluroato de fluticasona inhalador nasal (últimamente reemplazado por la MOMETASONA), y además no me sean exigidos los copagos y cuotas moderadoras, tal y como se reglamenta en el Acuerdo 0260 de 2004, Artículo 6° parágrafo 2° la excepción del pago de las cuotas moderadoras para la atención de patologías que requieran de un control permanente, y en el artículo 7° se regula que las enfermedades de alto costo o catastróficas están exentas de copagos (...).”, igualmente, se conceda el tratamiento médico integral y el reembolso de los medicamentos que fueron adquiridos de forma particular.*

1.2. Como fundamentos de sus pretensiones manifestó, en síntesis, que, su hijo de 3 años de edad, se encuentra afiliado en SANITAS EPS, en calidad de beneficiario, quien padece de *“Asma moderada persistente sin control, rinitis alérgica leve intermitente”*, razón por la que sus médicos tratantes le han prescrito

los siguientes medicamentos: “*MONTELUKAST 4m granulado en sobres (últimamente reformulado por la presentación en tabletas), DESLORATADINA en jarabe (últimamente reemplazando a la LORATADINA en jarabe), BECLOMETASONA 50mg/dosis solución o suspensión, SALBUTAMOL de 50 mg/inhalador bucal y FLUTICASINA de 27.5 gr fluroato de fluticasona inhalador nasal (últimamente reemplazado por la MOMETASONA)*”.

Señaló que, los citados medicamentos no le han sido suministrados al menor por parte de Droguerías Cruz Verde, bajo el pretexto de que están agotados por el laboratorio, situación que pone en riesgo su salud y vida, pues requiere de los mismos de forma continua y permanente para no agravar su patología.

Por lo anterior, ha venido sufragando de su propio peculio los medicamentos que no le han entregado las accionadas; advirtiendo que éstos si están disponibles para su compra, pero de forma particular, por lo que considera que su desabastecimiento no es una causa real que justifique su negativa a entregarlos.

Asimismo, sostiene que los médicos tratantes del menor han reemplazado o reformulado algunos de estos medicamentos por otros similares a fin de garantizar su acceso, sin embargo, persiste la negativa por parte de la EPS SANITAS de autorizarlos y entregarlos, aduciendo que los nuevos medicamentos también están agotados.

2. EL FALLO IMPUGNADO

Como primera medida, el juzgado de primera instancia, expuso que, en el presente asunto, existió una contradicción por parte de las entidades accionadas en relación con el suministro de los medicamentos reclamados por el accionante; pues de un lado, SANITAS EPS, refiere que los autorizó, y de otro lado, Droguerías Cruz Verde señala que unos medicamentos no fueron autorizados, otros están anulados y algunos presentan novedad de agotados. Por tal razón, esa sede judicial se comunicó con el señor Jaime Guloso, quien indicó que los medicamentos no habían sido autorizados ni suministrados.

En esos términos, al tratarse de un menor de 3 años de edad, quien padece de “*asma moderada persistente sin control, rinitis alérgica leve intermitente*”, y, por tanto, sujeto de especial protección constitucional, a quien de manera injustificada no se le ha garantizado la efectiva prestación del tratamiento que requiere para el manejo de su enfermedad, se torna evidente la vulneración de sus derechos fundamentales a la salud y vida digna, siendo entonces procedente la acción de amparo para ordenar a la EPS accionada, la entrega oportuna de los medicamentos ordenados por su médico tratante.

De otra parte, frente al reembolso de los valores pagados por el actor, por concepto de medicamentos adquiridos de forma particular, arguyó que, la misma comporta una aspiración de contenido meramente económico, que no puede ser amparada mediante la presente acción, ya que existen otros medios de defensa judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud donde puede elevar ese tipo de solicitudes. Además, no se evidencia afectación alguna al mínimo vital del accionante, ni confluyen circunstancias excepcionales que ameriten la intervención del juez constitucional.

Ahora, en relación con la exoneración de las cuotas moderadoras y copagos, refirió que, en el presente asunto, no se acreditó la imposibilidad económica de los progenitores del menor para asumir estos costos, pues de manera conjunta ambos padres devengan más de 5 smlmv.

Finalmente, en razón a que algunos medicamentos requeridos por el menor presentan la novedad de estar agotados, ordenó a la EPS accionada citar un comité médico científico a fin de establecer que medicamentos resultan idóneos para el tratamiento del menor, teniendo en cuenta los que están disponibles. Asimismo, concedió el tratamiento integral deprecado.

3. LA IMPUGNACIÓN

Dentro del término legal, la EPS accionada, se opuso a la concesión del tratamiento integral a favor del menor de edad, pues sostiene que no existe orden médica alguna que prescriba la necesidad de dicho servicio, así como tampoco se cumplen los requisitos jurisprudenciales para tal efecto, siendo el concepto del galeno el único que puede determinar su procedencia de acuerdo a la patología del menor.

De otra parte, expuso que, dicha entidad ha cumplido cabalmente su obligación de aseguramiento en los servicios de salud que ha requerido el menor de edad, basándose dicha determinación en hechos futuros e inciertos y no en una real vulneración a sus derechos fundamentales; por lo que, luce improcedente su protección constitucional.

Con todo, solicitó en caso de no acoger su solicitud, se delimite exactamente que el tratamiento integral sea cubierto para la tecnología en salud que llegue a requerir el menor A.D.G.M, y que, si llegase a necesitar servicios que no se encuentren contenidos dentro del PBS, sean informados por escrito, indicando expresamente que sobre los mismos existe la facultad de recobro ante el extinto FOSYGA hoy ADRES, para efectos de reintegrar el 100% de los recursos que deba cancelar por coberturas no contempladas dentro del plan de beneficios.

4. CONSIDERACIONES

4.1. La Constitución Política en su artículo 86 estableció la acción de tutela, a fin de que toda persona pueda reclamar en todo tiempo y lugar, mediante un procedimiento breve y sumario la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

4.2. Con relación al Derecho Fundamental a la Salud la Corte Constitucional ha sostenido que este *“...es un derecho fundamental y tutelable, que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente dignos, siendo la acción de tutela el medio judicial más idóneo para defenderlo.”*¹

Esa Corporación igualmente ha sostenido que la protección constitucional del derecho a la salud tiene su principal fundamento en su inescindible relación con la vida, entendida ésta, no desde una perspectiva biológica u orgánica, sino como *“la posibilidad de ejecutar acciones inherentes al ser humano y de ejercer plenamente los derechos fundamentales, de donde se concluye que si una persona sufre alguna enfermedad que afecta su integridad física o mental impidiéndole continuar con sus proyectos personales y laborales en condiciones dignas, su derecho a la vida se encuentra afectado, aún cuando biológicamente su existencia sea viable”*²

4.3 Descendiendo al caso en concreto, se advierte que, la inconformidad planteada por parte de la EPS impugnante, radica en la concesión del tratamiento integral, pues considera que dicha decisión se sustenta en un hecho futuro e incierto y no en la concreción de un hecho vulnerador que lesione o amenace los derechos fundamentales del accionante, siendo entonces improcedente emitir ese tipo de órdenes, amén de que no existe orden médica que determine su necesidad y pertinencia.

Frente a dicho tópico, debe señalarse que, la orden otorgada por el a-quo no va encaminada a ordenar prestaciones futuras e inciertas, o presumir que la entidad negará la prestación de los servicios, o incluso el mal uso de los recursos del sistema de salud, sino a garantizar la prestación de los servicios prescritos por los médicos tratantes de manera oportuna y efectiva, en este caso, nuevamente se remite el despacho a la condición médica del menor de edad, quien fue diagnosticado con *“ASMA MODERADA PERSISTENTE SIN CONTROL,*

¹ Corte Constitucional, Sentencia T-737 de 17 de octubre de 2013. M. P. Dr. Alberto Rojas Ríos.

² Corte Constitucional, sentencia T-201 de 2014, reiterada T- 131 de 2015

RINITIS ALERGICA LEVE INTERMITENTE”, patología de la cual puede extraerse que el paciente requiere y necesita atención integral no solo de los servicios aquí ordenados sino de aquellos tendientes a mejorar su situación médica, por lo que no resulta razonable someter al accionante y a la administración de justicia a la interposición de una acción de tutela respecto de cada evento, procedimiento o medicamento prescrito y no autorizado o concedido oportunamente por la accionada.

En consecuencia, a fin de garantizar la prestación de los servicios médicos ordenados sin dilación alguna se dispondrá mantener el tratamiento integral, el que, por supuesto se suministrará en el marco y conforme a los lineamientos determinados por el médico tratante y para la patología antes descrita, lo cual cobra mayor relevancia en tratándose de sujetos de especial protección constitucional como lo es el caso del agenciado de tan solo 3 años de edad, que requiere de la adopción de medidas excepcionales en aras de proteger sus derechos fundamentales a la salud, en conexidad con la vida digna y vida, circunstancia que permite mayor flexibilidad al momento de conceder el amparo constitucional.

5. CONCLUSIÓN

En estas condiciones la sentencia impugnada habrá de confirmarse, pues es del resorte de la entidad promotora de salud convocada a juicio constitucional brindar oportuna e integralmente la asistencia médica al menor ANGEL DAVID GULLOSO MERCADO, por la patología (*ASMA MODERADA PERSISTENTE SIN CONTROL, RINITIS ALERGICA LEVE INTERMITENTE*) que padece.

6. DECISIÓN DE SEGUNDO GRADO

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de este Distrito Capital de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

6.1. CONFIRMAR la sentencia del 18 de noviembre de 2022, proferida por el Juzgado 53° Civil Municipal de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

6.2. NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito.

6.3. REMITIR las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÚMPLASE

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

L.S.S

Firmado Por:

Luis Augusto Dueñas Barreto

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 025

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4f764ab14f478f96d8be1643cae5da2efd0fd8c25c3e7ec0287271c7a3144aba**

Documento generado en 28/02/2023 10:44:17 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>